

La polifonía toma el continente

Nuevas voces en el escenario

—» CATALINA JIMÉNEZ

Colombiana. Historiadora.
Máster en Estudios
Latinoamericanos por la
Universidad de Salamanca.
Docente e investigadora, en la
Facultad de Finanzas, Gobierno
y Relaciones Internacionales
de la Universidad Externado de
Colombia.

Un sonido parece vibrar a lo largo del continente. Las múltiples voces que suenan, si se escuchan de cerca, son independientes. Sin embargo, en conjunto producen un sonido tal que parece estremecer las estructuras sociopolíticas que se creían fuertes después de las transiciones políticas del siglo pasado. Reconocer las nuevas voces, dónde surgen, en qué contexto, de qué hablan, quiénes la producen, cómo se hacen conocidas y si son pertinentes para la democracia actual, nos permitirá entender y disfrutar, o no, el sonido que emite nuestra región.

El murmullo actual tiene ligeras diferencias con el de años anteriores, en cuanto a temáticas, repertorios de acción, recursos, formas organizativas y miembros participantes. Así, durante los procesos de transición política hacia la democracia durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, las organizaciones sociales y su acción colectiva se concentraron en la necesidad de consolidar el régimen democrático y con ello la instrumentación de las garantías de derechos civiles y políticos para los ciudadanos.

En ese sentido, «la acción colectiva no se orientó hacia intereses específicos de un sector social; la instalación de la democracia fue la meta principal» (Garretón, 2011: 237), de esta forma, los partidos políticos se consolidaron como actores fundamentales en los nuevos diseños institucionales, en los que las tareas respecto al «requerimiento de ajuste y estabilidad económicos y políticos desincentivó la acción colectiva que se creía ponía en riesgo estos procesos» (Garretón, 2011: 238) y, con ello, hubo cierta desarticulación de los movimientos y organizaciones sociales al quedar sin el punto central de articulación.

Pese al enorme significado simbólico, político e instrumental que la democracia tuvo para los ciudadanos latinoamericanos, las reformas económicas instrumentadas a partir de finales de la década del ochenta golpearon de forma contundente a amplios sectores de población, que empezaron a emerger a través de formas organizativas más horizontales, asamblearias y territoriales, en los cuales, detrás de sus demandas primordiales, una nueva cuestión se puso de manifiesto: «la calidad de la democracia ganada y conquistada» (Garretón, 2011, p. 240). Por ello, las acciones colectivas han estado marcadas por diversidad de temas entremezclados que apuntan a una necesidad de resolución urgente por los gobiernos y de inclusión, que haga partícipes a los actores sociales movilizados.

Estas voces hacen parte de lo que se conoce como *nuevos movimientos sociales* (NMS), donde los conflictos o tensiones surgen, como lo afirma Habermas (1981), no tanto en áreas de reproducción material, ni tampoco en partidos u organizaciones. Los nuevos conflictos aparecen en áreas de reproducción cultural, integración social y sociabilización. En ese sentido, los NMS evidencian la tensión entre el individuo y el Estado, y dan mayor importancia a las «identidades y objetivos resultantes de diversas formas de asociacionismo y activismo colectivo con carácter movilizador» (Touraine, 1981; Melucci, 1985). Así, a los NMS el poder político les parece menos significativo, y su objetivo en comparación con los viejos movimientos sociales es la movilización de la sociedad y no la toma del poder político.

Sintonizando las voces para entender los sonidos

Aunque las voces que producen los sonidos que replican en la calle han estado allí durante mucho tiempo y han sido parte constituyente de las transformaciones mismas de la región, aún para los gobiernos de turno esos ruidos son difíciles de interpretar y, más que ello, medir su alcance para el sistema político y, con esto, su capacidad de desafío. Podríamos afirmar, siguiendo nuestra analogía, que una voz puede ser entendida como una movilización social, es decir, un repertorio de acción colectiva en el que un sector de la población agraviado alza su voz y sale a la calle exigiendo que los gobernantes locales o nacionales satisfagan, y a corto plazo en términos temporales, la demanda que los agrupa.

En este caso puede ser desde la creación de infraestructura como hospitales o escuelas, hasta temas exclusivos de identidades indígenas, negritudes o la defensa de territorios y prácticas socioculturales de vida.

Ahora bien, de acuerdo con Charles Tilly, la acción colectiva es un proceso deliberado de costo y beneficio que surge del desarrollo de cuatro factores: interés (medurable por las ventajas o beneficios que pueden resultar de la acción conjunta), organización (delimitada por las identidades, lazos y solidaridades comunes que aumenten su capacidad de acción coordinada), movilidad (adquisición del control colectivo sobre los recursos coercitivos, utilitarios y normativos necesarios para la acción), y la oportunidad de aplicarlos para actuar eficazmente (Tilly, 1978: 7-10, 52-55).

En ese orden de ideas, un movimiento social es una forma de acción colectiva, y la existencia de una acción colectiva implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión que trata de resolver. Por lo tanto, podemos hablar de movimiento social, es decir, de varias voces que replican juntas cuando están integradas por sectores diversos de la sociedad, reunidos en torno a agravios más abstractos y seminales que estructuran y dan sentido al sistema político; es continuo en tiempo y espacio geográfico; logra una significativa integración simbólica aprovechando las dicotomías de proyectos políticos en pugna, y su meta consistente es realizar cambios sociales estructurales y fundamentales para la comunidad política.

Sin embargo, «no cualquier conflicto desemboca en una acción colectiva que toma la forma de un movimiento social» (Ibarra, 2000: 9-26). A partir de esta premisa, diversas voces —en momentos solitarias y en otros polifónicas— han caracterizado al continente en la última década y con mayor amplificación en los últimos años. Así, los pingüinos en Chile, las marchas cocaleras en Bolivia, las marchas por

la dignidad y la paz en Colombia o en México, la movilización de las escobas en algunas ciudades de Brasil, el movimiento Yo Soy 132 en México, la movilización en contra de las empresas mineras en la región andina, las protestas de los *black bloc* meses previos al Mundial de Fútbol o los ataques de *Anonymus* a las páginas oficiales dan muestra de lo que se ha llamado *producción de una concepción alternativa de ciudadanía* (Revilla, 2010: 54). Allí, los movimientos a través de diversos repertorios de acción colectiva «multiplican los escenarios públicos en los cuales se puede cuestionar y volver a dar significado a los diversos tipos de exclusión no sólo el político» (Escobar, Álvarez y Dagnino, 2001: 17).

En ese sentido, las voces que se han instalado en los diversos países latinoamericanos disputan la creación, discusión, implementación y evaluación de políticas públicas y reformas estatales; en otras palabras, se han convertido en lugares de «propensión hacia la generación del conflicto debido a los intereses y objetivos contradictorios o a las relaciones de poder desiguales que pueden derivarse» (Long, 2007: 142-147). Por esta razón conviven entonces, en los sistemas políticos de la región después de las transiciones a la democracia, viejas y nuevas demandas sociales que encuentran en la movilización una posibilidad de resolver sus problemáticas, dada a la incapacidad de las instituciones representativas (partidos políticos, legislativos u organismos de control) para articular, procesar y resolver estos *inputs* dentro de los lineamientos que brinda cada uno de los diseños institucionales de los países.

Esa disociación entre los resultados económicos espectaculares, como en el caso de Brasil, o moderados, como en el de Paraguay y países de Centroamérica, la capacidad y efectividad de las instituciones político-representativas y la ampliación y fortaleza de las organizaciones de la sociedad civil, demuestran la formación de dos posiciones coexistentes en Latinoamérica a través del clivaje Estado-mercado y, con ello, el surgimiento de nuevas «dialécticas entre regulaciones públicas, mercantiles, asociativas y comunitarias, compitiendo por espacios de influencia y conformación» (Ibarra, Goma y Martí, 2002: 58), en los cuales la sociedad se posiciona como un actor determinante tanto en el dictamen como en la gestión de políticas.

Los espacios en disputa expresan también valores y concepciones políticas en conflicto que, a través de redes de acción colectiva crítica que operan en contextos más complejos y con mayor capacidad de

«Un movimiento social es una forma de acción colectiva, y la existencia de una acción colectiva implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión que trata de resolver»

impacto político, pretenden «politizar campos de discusión y conformar tipos multiorganizativos con capacidad de conectividad, ajena a las culturas de militancia de la izquierda tradicional» (Ibarra, Goma y Martí, 2002: 68-69).

En ese sentido, las movilizaciones de las que somos testigos, y en otros casos partícipes, a lo largo de plazas y calles de las ciudades latinoamericanas, reflejan la transformación socioeconómica, cultural e identitaria de sus ciudadanos, quienes exigen también la de sus regímenes de gobierno, atrapados en la defensa de sus intereses partidarios o corporativos, a partir de marcos jurídicos, sociales y económicos que parecen en ocasiones hacer oídos sordos a la polifonía que se escucha de fondo.

Esa polifonía de voces antiguas y nuevas da cuenta de la existencia de conflictos irresueltos, estructurados a partir de tres tipos de sonidos particulares que alimentan un ruido que parece caracterizar al continente en los últimos años.

Reconociendo las voces que hacen el sonido

Voces destructoras

El primer sonido está compuesto de voces que defienden la destrucción y con ella el uso de acciones colectivas de tipo violento en contra del Estado y el mercado que se operacionalizan en el espacio público. En esta categoría encontramos las movilizaciones de grupos como los *black bloc*.

Una noche de agosto de 2013, en medio de las protestas que se tomaron la Avenida Paulista en contra del alza en el transporte público y el elevado costo del gasto público para la realización de varios eventos deportivos como la Copa FIFA Confederaciones 2013, la Copa Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016, emergió un grupo de jóvenes con el rostro tapado que se «abalanzaron contra la sucursal de una entidad bancaria, arrancaron a patadas las pasarelas de entrada de los cajeros automáticos, golpearon con palos fachadas de edificios públicos, lanzaron piedras y pintaron grafitis, mientras buscan su próximo objetivo, un McDonald's, un puesto móvil de la policía o la estación del metro» (*El País*, 31.8.2013).

Esa es la voz de los *black bloc*, un grupo que surgió en la década de los ochenta en la República Federal Alemana en «respuesta al despliegue policial que significó la movilización antinuclear, la cual incluyó arrestos y desalojos de viviendas especialmente de las zonas

periféricas» (Illades, 2014: 415). Desplegado desde esos años a lo largo del mundo, ha hecho presencia en la región en Chile, México y Brasil.

Los miembros de este grupo tienen características similares: jóvenes desempleados, bajo nivel educativo, habitantes de zonas periféricas urbanas donde se evidencia la exclusión, la pobreza y el racismo al tener un entorno donde la presencia institucional es cuestionable, ya que alrededor de estos sectores (favelas, villas miseria, barrios o colonias) se erigen muros interpretativos que «impiden cualquier debate honesto sobre la violencia diaria que provoca la exclusión económica» (Davis, 2007: 268). En otras palabras, «son vecinos de la periferia, el contacto que tienen con los problemas del país es mucho más cercano. Cuando hablan de la violencia provocan mucho porque lo que quieren es darle un significado nuevo al vandalismo» (*El País*, 31.8.2013).

Ese vandalismo que se acerca al delito (de ahí la ocultación deliberada de sus rostros y la vestimenta negra) es la forma en que justifican su necesidad de ser escuchados. De ese modo, las tácticas violentas incluyen destrucción del mobiliario público y ataques directos a iconos que ellos consideran que deben asediar para acabar con el «sistema tecnoindustrial» (Illades, 2014: 419).

En el caso de Brasil, la entrada rápida y destructiva a centros comerciales, la destrucción de vidrieras de las tiendas y marcas más significativas de consumo dejan entrever la demanda, sustentada por un discurso que se ha denominado neoanarquista desde el cual consideran que la invisibilidad y exclusión a los que han sido sometidos es causal suficiente para sus actos. Abogan por la destrucción del Estado actual con el fin de «reivindicar la superioridad de la vida sobre la dictadura de los objetos» (Illades, 2014: 429), ya que todo acto de gobierno es coercitivo en sí mismo y este caerá a largo plazo, porque en un presente que carece de horizonte: «no nos dejaron soñar, ahora no los dejaremos dormir» (*Proceso*, 7.10.2013).

La amenaza directa al modelo político y económico establecido en la región que parece representar los *black bloc* requiere de formas organizativas difusas y horizontales, sin líderes claros, lo que parece ser la característica de las voces destructoras. Así, su actuación violenta es efectiva en la medida en que los recursos organizativos no se desperdician porque se carece de ellos o se usan para atacar puntos estratégicos tales como el rompimiento de protestas pacíficas enfrentándose directamente a las autoridades. Estos círculos organizativos se han establecido en zonas urbanas de fácil movilización y huida para sus miembros, donde además la información circula de forma trepidante a través de las redes sociales.

Resulta significativa la consistencia de estos grupos en el tiempo. Si bien carecen de formas organizativas institucionales, son capaces de mantenerse en reserva hasta la próxima movilización y de forma paralela van reclutando miembros en los sectores urbanos periféricos. En el caso mexicano, durante el 2011 ampliaron sus miembros a través de la consolidación de grupos estructurados en los *black bloc*, individualidades inclinadas hacia lo salvaje, la Célula Revolucionaria Insurreccional Anarquista o las células autónomas de inmediata revolución. Así, los *black bloc* emergieron con fuerza en las movilizaciones de Brasil durante el 2013 y 2014; y en México, contra la manifestación del 7 de julio de 2014 contra la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto y en la tradicional manifestación del 2 de octubre que conmemora la masacre de las tres culturas de 1968, y que se justificó como una «respuesta natural a la violencia provocada por el Estado durante tantos años» (*Animal Político*, 25.11.2013).

Pese al sonido destructor de estos grupos, los resultados son exigüos en términos de la apuesta por acabar con el Estado, al carecer de recursos significativos que puedan incidir en otros actores o instituciones del sistema político, y de capacidad de presionar y romper la premisa respecto a la defensa y profundización de la democracia como el régimen más aceptado. Además, el uso de tácticas violentas tiene un precio, que va desde la persecución policial a la deslegitimidad de sus demandas y el rechazo del resto de la sociedad a sus acciones.

Voces constructoras

El segundo sonido lo conforman voces que defienden la construcción y consolidación del Estado y, con ello, el uso de acciones colectivas toleradas que oscilan en ciertos momentos entre institucionalizadas y matices violentos. Dentro de esta categoría podemos encontrar las movilizaciones medioambientalistas, campesinas, mineras, sectoriales respecto a salud, educación, vivienda, transporte, infraestructura, defensa de la tierra, o laborales; es decir, aquellas en las que se exige al Estado resultados respecto a las políticas públicas ejecutadas o que deben hacerse.

Estas voces son las que más sonido han producido, tanto por su intensidad, entendida en lo numeroso de sus organizaciones y acciones colectivas, como por la capacidad que han alcanzado para incidir en el sistema político, posicionando sus demandas, ganando en recursos organizativos, políticos, simbólicos y económicos, y aumentando con ello el poder de negociación de diversos actores sociales.

Aquí es donde la relación sociedad-Estado-mercado se hace más aguda. Estas voces critican la forma o modelo político institucional

que se ha defendido y los resultados que la ciudadanía espera, ya que «las luchas en que se traducen estas movilizaciones o acciones se paentan o entienden por formas de democracia participativa, donde la emancipación por la que se lucha no es solo política» (Sousa Santos, 2001: 180).

Ejemplos de estas voces son la movilización estudiantil en Chile y Colombia, las protestas en contra de las industrias mineroextractivas en Perú, Ecuador o Colombia, las extensas marchas en Brasil en contra del alza en el transporte y el gasto público, las movilizaciones en Bolivia de jubilados y mineros durante la promulgación de la ley minera o la protesta en México frente a las reformas estructurales en educación y el tema petrolero. Todas dan cuenta de la capacidad de estos colectivos de tipo sectorial, de estructurarse como una red de acción crítica que construye en el plano simbólico un sistema de códigos (injusticia-privatización-soberanía-paz) que les permite interpretar «una cierta parcela de la realidad a partir de un cuadro alternativo de valores de referencia» (Ibarra, Goma y Martí, 2002: 72); es decir, un marco de acción que convence de la posibilidad de transformación por medio de un proceso movilizador.

Una característica a resaltar de las voces constructoras es el tipo de miembros que forman parte de ellas: desde activistas sindicales hasta jóvenes, niños y mujeres de grupos barriales articulados a través de organizaciones con anclajes territoriales de orden local, regional o nacional. Es importante resaltar que estos colectivos, en momentos de movilización en torno a temas sectoriales, son capaces —a pesar de tener intereses distintos— de articularse como una red y construyen su identidad respecto al agravio del cual son objeto y con el reconocimiento de que este debe ser resuelto a través de decisores institucionales o presionando para ser incluidos en la formulación de la política pública.

Dicha presión se realiza a través de diversos repertorios de acción colectiva en los cuales se mezclan la marcha tradicional, la toma de calles, los bloqueos de carreteras, la toma de entidades públicas, hasta actos como el besatón, abrazatón o desnudatón, que junto con los *flashmobs* y el uso de redes sociales evidencian que a través de estrategias discursivas orientadas hacia la acción, la incidencia política y el apoyo de coaliciones promotoras, logran un eco ciudadano y, con ello, la profundización del vínculo entre el proceso movilizador y el entorno social. Fortalecen así su conexión con la opinión pública, en la que «se

AL

«El uso de tácticas violentas tiene un precio, que va desde la persecución policial a la deslegitimidad de sus demandas y el rechazo del resto de la sociedad a sus acciones»

evidencia una generación emergente de prácticas de movilización social, de nuevo tipo» (Ibarra, Goma y Martí, 2002: 68).

Esta capacidad da cuenta de grupos con mayores capacidades organizativas, que combinan diversas formas asociativas en las que se entremezclan formas verticales y horizontales de decisión y planeación, pero con mayores recursos informativos y cognitivos, que flexibilizan la formación de liderazgos, el mantenimiento de miembros y la capacidad de realizar acciones colectivas significativas.

Aunque estos grupos sociales desafían al Estado, no buscan la toma del poder político sino incidir y participar en el proceso de toma de decisiones y en la formulación del ciclo político, razón por la cual adoptan estrategias que van desde la confrontación con el uso de acciones violentas hasta la colaboración a través de la inclusión en mesas de negociación como las consultas previas o la cooperación cuando se solucionan problemas puntuales que han sido visibilizados a través de la movilización.

El uso de diversas estrategias ha permitido la acumulación de recursos simbólicos, políticos y sociales suficientes para que estas organizaciones establezcan interacciones con los partidos políticos durante la campaña electoral. Se trata de un cálculo en el que tanto movimientos como partidos pueden ganar. Los primeros, mayor capacidad de presión e incidencia a través de mecanismos de negociación dentro de las instituciones; los partidos políticos, mayor número de representantes electos.

Las interacciones que han establecido las voces constructoras con los partidos en Latinoamérica han sido de cinco tipos, de acuerdo con el investigador Michael Hangan (1998): articulación, permeabilidad, alianza, independencia y transformación.

El sonido constructor que han creado estas voces ha tenido resultados significativos no solo para los movimientos sino para la calidad misma de la democracia en cuanto a la eficiencia que el Estado debe tener. En ese sentido, la acumulación de recursos y la capacidad de presión y negociación con otros actores del sistema político han erigido a este tipo de movimientos como primordiales dentro de los ejercicios de vigilancia, control y denuncia de los resultados de la política pública.

Además, la apertura de oportunidades políticas y canales de participación política de amplitud local, regional y nacional incrementa la contestación, lo cual demuestra que «gobiernos democráticos aceptan niveles más altos de disenso colectivo a la vez que liberan canales de representación» (Velasco, 2010: 233). Así, las voces constructivas son necesarias para medir el resultado mismo de los gobiernos, la coherencia del modelo estatal, el fortalecimiento de la ciudadanía, la permanencia de lo público y la consolidación de la democracia.

Voces que hacen eco

El eco es un fenómeno acústico producido cuando una onda se refleja y regresa hacia su emisor. Usando esta analogía encontramos las voces que defienden identidades particulares y valores estructurales que cuestionan al Estado en clave filosófica y política, haciendo uso de acciones colectivas novedosas en términos simbólicos, así como el uso de herramientas judiciales. De ese grupo hacen parte colectivos étnicos como los indígenas, afrodescendientes, LGBTI, mujeres, organizaciones animalistas, defensores de la paz, a favor de la transparencia o respecto a la eutanasia.

Como anotan algunos teóricos, al contrario de los movimientos anteriores a la transición a la democracia, que se identificaron en clave de ciudadanía-clase social, los protagonistas actuales de estas voces son «grupos sociales estructurados en torno a valores posmaterialistas, con intereses colectivos a veces muy localizados pero potencialmente universalizables y que exigen una afirmación de su subjetividad sobre la ciudadanía» (Sousa Santos, 2001: 180). Por lo tanto, los miembros de estas organizaciones tienen en sus subjetividades el principio identitario desde el cual construyen sus demandas frente al Estado; de esta forma es posible idear y luchar por nuevas formas de ciudadanía, no solo: «meramente individuales sino colectivas; ejercicios y formas basados en formas político jurídicas que incentiven la autonomía» (Sousa Santos, 2001: 182).

Así, las demandas de estos grupos sociales son únicas y cuando desafían al Estado lo hacen en términos en los cuales queda implícita la conformación misma de los valores en los que se han estructurado los diversos modelos estatales. Por ello, la lucha contra la exclusión y en otros casos la restauración de los valores seminales del contrato entre gobierno y ciudadanos visibilizan la «idea de una obligación política horizontal entre ciudadanos, la participación y la solidaridad en la formulación de la voluntad general, lo cual es susceptible de fundar una nueva cultura política, y en última instancia una nueva calidad de vida personal y colectiva» (Sousa Santos, 2001: 181).

Se evidencian cambios en las formas organizativas; se recupera el principio de comunidad, reflejado en la preferencia por estructuras descentralizadas, flexibles, no jerárquicas y que logran conformar redes asociativas de alcance local e incluso internacional.

Para ser escuchados, quienes forman parte de esas organizaciones necesitan de un activismo constante, estratégico y con elevados recur-

» Aunque estos grupos sociales desafían al Estado, no buscan la toma del poder político sino incidir y participar en el proceso de toma de decisiones y en la formulación del ciclo político «

AL

son informativos y cognitivos. De ahí que prefieran el uso de repertorios de acción simbólicos que centren la atención de la opinión pública y de los actores institucionales y decisores políticos en la transformación subjetiva e identitaria que busca ser resuelta. En ese sentido, las campañas y marchas por los derechos de la comunidad LGBTI o los animales, que se han presentado por toda la región, son buenos ejemplos. A ello se suma una «vigorosa utilización de los medios de comunicación social tradicional, así como el uso de redes sociales, combinado con actividades de protesta y confiando en la movilización de los recursos que ellas proporcionan» (Sousa Santos, 2001: 182).

Además, se hace uso de acciones jurídicas en las que se pretende presionar a través de canales institucionales cambios o reformas normativas en las que se reflejen sus intereses y con ello incidir en el diseño normativo, político y filosófico de los Estados; ejemplo de ello son la aprobación de los matrimonios del mismo género o la adopción por parejas del mismo sexo en Argentina, Colombia, Chile o Uruguay.

Vale la pena mencionar la consistencia y la capacidad movilizadora de las comunidades indígenas a lo largo del continente, que han logrado trascender la demanda étnica para trabajar de forma coordinada con grupos medioambientalistas en torno a la defensa de la tierra y de su forma de vida frente a los proyectos mineroenergéticos.

De esta forma, las voces han logrado que su eco sea escuchado por las otras voces que conforman la polifonía de sonido (movimientos) que grita a lo largo del continente. Así, las voces eco han ganado en reconocimiento, recursos y capacidad de presión efectiva a través del *lobby* y en alianzas con amplios sectores de la sociedad civil, e incluso partidos, posicionando con ello procesos deliberativos en la agenda pública no solo sobre el Estado mismo, sino sobre la calidad del régimen democrático establecido.

Finalmente, las voces en eco muestran la complejidad social que se ha ido tejiendo en Latinoamérica, con una clase media más robusta pero donde los resultados de inclusión de sectores excluidos, la eficiencia estatal respecto a las políticas públicas y la consolidación del régimen democrático han elevado la protesta y con ello una polifonía de voces que grita las transformaciones del continente y los desafíos que la democracia aún debe resolver para sus ciudadanos.

Conclusiones

La transición a la democracia que vivió el continente durante las últimas décadas en clave de representación-gobernabilidad permitió la

amplificación de mecanismos de participación política. Entendidos como incentivos e insumos para los ciudadanos, a través de formas organizativas diversas, incidieron —de forma definitiva en algunos casos y tangencial en otros— en cambios en sus sistemas políticos. De esta forma, asistimos a una *explosión* de movilizaciones sociales que dejan entrever los cambios demográficos y socioeconómicos que se han dado en los países latinoamericanos y, con estos, las contradicciones de los modelos sociopolíticos, los cuales tienen en los movimientos sociales una forma de acción política, una voz no solo para ser escuchada sino determinante en los procesos de decisión y deliberación política.

En primer lugar, es evidente que la presencia de numerosas movilizaciones sociales en toda Latinoamérica no debe entenderse desde una clave de crisis de gobernabilidad, sino como una ganancia en mejoras democráticas, en la medida en que son pacíficas y la gran mayoría de ellas se desmarcan de los actores violentos y proponen una relación de cooperación y colaboración en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Así las voces constructivas y las eco han tenido resultados efectivos respecto a la puesta en la agenda de sus demandas y resoluciones, situación que evidencia su conformación como una red, es decir, como un campo relacional de conflicto respecto a la interpretación tanto del modelo económico, político y social como de las implicaciones de este para los ciudadanos.

En segundo lugar, la polifonía de voces que gritan en los diversos países demuestran la yuxtaposición de viajes y nuevas demandas sociopolíticas operacionalizadas a través de novedosos repertorios de acción no violentos y del uso de los medios de comunicación virtual. Es en esa «cierta impureza donde reside la verdadera novedad» (Sousa Santos, 2001: 181) de los movimientos sociales en la región y con ello esa revitalización de discursos políticos más cercanos al cuestionamiento de la efectividad de la democracia y del tipo de ciudadanía que se ha construido. En contraste con las voces colaborativas, las destructivas parecen tener capacidad para hacerse sentir a través de la creación de caos y con ello la destrucción del Estado; sin embargo, ese discurso más que sustentado en condiciones ideológicas, funciona como válvula de escape urgente, violenta y en algunos casos desesperada frente a las condiciones de inequidad anquilosada en el continente.

En tercer lugar, a pesar de que la polifonía de voces crea un sonido distorsionado pero intenso respecto a las urgentes problemáticas que

» Asistimos a una explosión de movilizaciones sociales que dejan entrever los cambios demográficos y socioeconómicos que se han dado en los países latinoamericanos y, con estos, las contradicciones de los modelos sociopolíticos «

denuncian los colectivos y movimientos sociales, se deben destacar las relaciones prácticas que han establecido con los partidos políticos, especialmente en momentos electorales o bajo el ejercicio de vigilancia, denuncia y seguimiento a los funcionarios públicos y con ello a la implementación de políticas que cumplan con los requerimientos mínimos que la democracia establecida y el diseño institucional han pactado con sus ciudadanos.

En cuarto lugar, la proliferación de voces destructivas, constructivas y eco demuestran cierto grado de madurez en las formas organizativas de los colectivos y movimientos sociales, e incorporan mayores recursos cognitivos, técnicos e informativos que redundan en un activismo más profesional y con posibilidad de trabajo en redes a nivel local, regional, nacional e internacional. Esto amplifica la capacidad de presión y posicionamiento de la acción colectiva no institucional como elemento necesario para medir la calidad democrática.

Por último, la polifonía nos habla de las diversas estrategias que movimientos y Estado han usado, para ser escuchados los primeros y para mantener estabilidad y gobernabilidad el otro. Con el fin de bajar la estrategia confrontativa, se requiere de transformaciones institucionales y culturales de los sistemas políticos que logren convertir la distorsión actual en un sonido armónico. Para crear vínculos estratégicos que apunten a la mejora del régimen, la deliberación y la redefinición del campo sociopolítico, y con ello, del mismo ciudadano.

Bibliografía

- Animal Político* (25.11.2013), «¿Quiénes protestaron el 1 de diciembre y por qué? I».
- DAVIS, M. (2007), *Planeta de ciudades miseria*, Madrid, Akal.
- El País* (31.8.2013), «“Black Bloc”, la nueva incógnita de las protestas de Brasil», http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/31/actualidad/1377913975_091756.html [consulta: 4.4.2015].
- ESCOBAR, A., S. ÁLVAREZ y F. DAGNINO (2001), *Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá, Taurus/Icanh.
- GARRETÓN, M. (2011), «Las dimensiones de la acción colectiva en América Latina», en *Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina*, Santiago, CEPAL.
- HABERMAS, J. (1981), «New Social Movements», en *Telos*, n.º 49, pp. 3-37.
- HANGAN, M. (1998), «Social Movements, incorporation, disengagement and opportunities. A long view», en M. Giugni, D. Mc Adam y C. Tilly (eds.), *From Contention to democracy*, Lanham, Rowan and Littlefield publishers.

- IBARRA, P. (2000), «¿Qué son los movimientos sociales?», en P. Ibarra, E. R. Grau y S. Martí (eds.), *Anuario de movimientos sociales. Una mirada sobre la red*, Barcelona, Icaria Editorial y Getiko Fundazioa.
- IBARRA, P., R. GOMA y S. MARTÍ (2002), «Redes de acción colectiva crítica e impactos políticos», en ídem (eds.), *Creadores de democracia radical movimientos sociales y redes de políticas públicas*, Barcelona, Icaria.
- ILLADES, C. (2014), «El retorno del anarquismo. Violencia y protesta pública en el México actual», en *Revista Sociología Histórica*, n.º 4, pp. 411-434.
- LONG, N. (2007), *Sociología del desarrollo. Una perspectiva centrada en el autor*, México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Colegio de San Luis.
- MELUCCI, A. (1985), «The symbolic challenge of contemporary movements», en *Social Research*, n.º 19, pp. 789-816.
- Proceso (7.10.2013), «Los encapuchados responden... ¡Con la revuelta no podrán!», <<http://www.proceso.com.mx/?p=354731>> [consulta: 7.4.2015].
- REVILLA, M. (2010), «América Latina y los movimientos sociales: el presente de la “rebelión del coro”», en *Nueva Sociedad*, n.º 227, pp. 51-67.
- SOMUANO, F. (2007), «Movimientos sociales y partidos políticos en América Latina: una relación cambiante y compleja», en *Revista Política y Cultura*, n.º 27, pp. 31-53.
- SOUSA SANTOS, B. de (2001), «Los nuevos movimientos sociales», en *Revista OSAL, Observatorio Social de América Latina*, n.º 5, pp. 177-184.
- TILLY, C. (1978), *From Mobilization to Revolution*, Nueva York, Random House, McGraw Hill Publishing, Adisson Wesley Publishing.
- TOURAINÉ, A. (1981), *The voice and the eye. An analysis of social movements*, Cambridge, Cambridge University Press.
- VELASCO, M. (2010), «Democracia, gobernabilidad y movimientos sociales en Colombia 1990-2006», en F. Jácome y M. Tanaka (eds.), *Desafíos de la gobernabilidad democrática, reformas institucionales y movimientos sociales en la región andina*, Lima, IE, IDRC-CRDI, INVESP, pp. 213-245.